


NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11404-05

REFERENCIA	Proyecto de Ley que Incorpora diversas medidas de índole tributaria
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	De Hacienda
INGRESO	24 de agosto de 2017
ARTICULADO	Seis artículos permanentes y cuatro artículos transitorios; el artículo 1° introduce modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta; el artículo 2° introduce modificaciones a la Reforma Tributaria (Ley 20.780) que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario; el artículo 3° modifica el actual artículo N° 62 del Código Tributario; el artículo 4° establece una norma de reconocimiento tributario a las donaciones efectuadas en razón de la visita papal; el artículo 5° introduce modificaciones a la Ley N° 20.899; el artículo 6° modifica el Decreto Ley N° 1939 de 1977 que establece normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de bienes del Estado

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

El Proyecto de Ley Incorpora diversas medidas de índole tributaria y constituye un misceláneo de medidas tributarias que intenta abarcar diferentes contenidos que dicen relación sobretudo con el hecho de que el año 2016 se aprobó en Chile la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAT). A raíz de dicha convención Chile se comprometió junto con otras jurisdicciones a implementar un estándar de intercambio automático de información financiera, que tiene por objeto combatir la evasión y elusión fiscales.

Si bien combatir la evasión fiscal es absolutamente necesario, las medidas propuestas en este proyecto deberían abordar de manera más detallada las diferentes aristas de su implementación ya que no se fijan procedimientos justos y regulados en relación a la modificación del artículo 62 del Código Tributario, ni tampoco se resguarda a los contribuyentes adheridos al régimen del artículo 41 D de la Ley de Impuesto a la Renta que se quiere eliminar. Adicionalmente se hace necesario proporcionar mayor información a aquellos que realicen donaciones para financiar la visita del Papa a nuestro país durante el año 2018, a fin de que éstos cuenten con los beneficios fiscales que motivan las donaciones 

CONTENIDO DEL **PROYECTO DE LEY**

I. SUS OBJETIVOS

El Proyecto de Ley busca lograr los siguientes objetivos:

1. Ajustar el Código Tributario a las normas contempladas en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAT) y en el Common Reporting Standard (CRS).
2. Avanzar en la lucha contra BEPS (Erosión de la base imponible y traslado de beneficios).
3. Incorporar una norma para mitigar los efectos fiscales de la visita del Papa.
4. Ampliar el plazo para negociar y ratificar los Convenios de doble tributación.
5. Aclarar el tratamiento tributario de las donaciones realizadas al Fisco.

II. CONTENIDO ESPECÍFICO DEL PROYECTO DE LEY

A continuación se describe cada uno de los ejes principales del proyecto:

1. Derogación del Régimen de Plataforma de Inversión contemplado en el artículo n° 41 letra D de la Ley Sobre Impuesto a la Renta.

El año 2002 se incorporó en Chile un régimen preferencial conocido como “sociedades plataforma de negocio”. El objetivo de dicho régimen era crear un marco tributario favorable para atraer capitales desde el exterior. Este régimen fue una idea frustrada ya que hoy en día existen solo 17 empresas que se acogieron a esta normativa y la OCDE ha establecido que este régimen preferencial podría ser nocivo para combatir BEPS, por lo que en el Proyecto de Ley se propone derogarlo a contar del año 2022, permitiendo así que los contribuyentes puedan migrar al régimen general de Tributación.

2. Modificación del artículo N° 62 del Código Tributario, incorporando normas sobre intercambio automático de información financiera.

Según lo señalado por el mensaje, esta medida propone ajustar el Código Tributario a las normas contempladas en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAT) y en el Common Reporting Standard (CRS), para que los procesos de

intercambio de información que deba realizar el Servicio de Impuestos Internos con otras autoridades financieras cumplan con los estándares internacionales.

Producto de lo anterior se propone en primer lugar incorporar normas con sanciones específicas para el caso de infracciones a las disposiciones tributarias vigentes, en segundo lugar se incorpora la obligación de las instituciones financieras de mantener un registro de los procedimientos que efectúen y por último establecer normas de interpretación del reglamento y la Ley de acuerdo a lo establecido en CRS.

Además establece que no se requerirá autorización de la Justicia Ordinaria para que las instituciones financieras entreguen al SII información sujeta a reserva, para dar cumplimiento a los convenios Internacionales sobre intercambio de información vigentes en nuestro País, siempre que dicha información diga relación con los siguientes casos:

- Cuando corresponda a titulares de cuentas financieras o controladores de dichos titulares, que sean entidades o personas naturales o jurídicas que tengan residencia tributaria en otra jurisdicción, o patrimonios que queden al momento de la muerte de una persona que al fallecer era residente de otra jurisdicción o personas jurídicas o entidades que no tengan residencia tributaria en Chile porque su administración efectiva se realiza en otra jurisdicción.
- Que se refiera al saldo o valor de las cuentas financieras que pertenecen a los titulares o controladores señalados anteriormente, las rentas pagadas a dichos titulares o controladores y las que se refieran a su identidad.
- Cuando se trate de información que se encuentre en poder de instituciones financieras calificadas como tales de acuerdo a un convenio internacional que disponga el intercambio de información sobre cuentas financieras.

3. Reconocimiento Tributario a las donaciones efectuadas en razón de la visita Papal

Se propone que los gastos de la visita del Papa a Chile en el mes de enero del año 2018, sean de cargo del sector privado a través de donaciones hechas a la Conferencia Episcopal. Las sumas donadas podrán ser rebajadas como gasto, aplicándose el límite global absoluto del art. 10 de la ley 19.885 equivalente al 5% de la Renta líquida Imponible, además no estarán sujetas al trámite de insinuación y estarán exentas de todo impuesto. Dichos beneficios serán aplicables solo a las primeras donaciones que acepte la Conferencia Episcopal de Chile hasta que se entere la cantidad máxima de 4.000.000.000.-

4. Ampliación del plazo para suscribir y ratificar los convenios para evitar la doble tributación

Propone modificar el Artículo Transitorio N° 4 de la Ley N° 20.899, aumentando a dos años más el plazo para suscribir y ratificar los convenios para evitar la doble tributación. Establece que los contribuyentes con domicilio o residencia en un país con el que hay un convenio para evitar la doble tributación, suscrito antes de 1 de enero del año 2019 y ratificado por el congreso antes del 1 de enero del 2021 pueden reconocer como crédito contra el impuesto adicional, el 100% del impuesto de primera categoría.

5. Donaciones al Fisco

Propone que las donaciones que se hagan al Fisco estarán exentas de impuesto y tendrán la calidad de gasto necesario para producir renta, no quedando sujetas al límite global absoluto del artículo 10 del DL 1939 ni tampoco al trámite de insinuación ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO

El Presente Proyecto de Ley es un misceláneo que introduce diversas medidas de índole tributaria respecto de las cuales es necesario hacer ciertas precisiones.

En primer lugar, se plantea la derogación del régimen de plataforma de inversión contemplado en el artículo 41 letra D de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Este régimen preferencial incorporado el año 2002 tenía por objeto atraer capitales desde el exterior, sin embargo, en opinión del ejecutivo ha tenido una escasa aplicación en la práctica. Debido a esto, y a que la OCDE ha considerado que podría ser nocivo para combatir BEPS, se propone su eliminación.

Esta medida podría tener efectos positivos, ya que si bien la idea del régimen era crear un marco tributario favorable para atraer a compañías externas, esto no fue posible ya que se entrabó la norma debido al temor de que Chile se convirtiera en un paraíso fiscal y además era incompatible con los tratados para evitar la doble tributación porque las sociedades plataforma de inversión no tenían domicilio ni residencia en Chile por lo que no les era posible acceder a los beneficios que dichos acuerdos establecían.

Sin embargo es necesario hacer dos precisiones: en primer lugar, el proyecto establece que, para dar a los contribuyentes de este régimen la posibilidad de migrar al régimen semi integrado del artículo 14 B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se propone su eliminación a contar del año 2022, pero sin otorgar la posibilidad de que los contribuyentes puedan optar al régimen de imputación total del artículo 14 A). Esto podría realizarse permitiendo que dichas sociedades

puedan transformarse en una Sociedad por acciones o en una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Adicionalmente, en el artículo segundo transitorio se establece que las sociedades que se incorporen al régimen general deberán llevar contabilidad completa en moneda nacional, y en el caso de que la sociedad llevara contabilidad en moneda extranjera y no tuviere autorización del SII para mantenerla, deberá efectuar la conversión asumiendo los efectos que esto pudiere causarle. En virtud de lo anterior, parecería que lo más apropiado sería otorgar autorización a dichas sociedades para llevar contabilidad en moneda extranjera, ya que su capital proviene del exterior.

En segundo lugar, el proyecto de Ley propone modificar el artículo 62 del Código tributario para incorporar normas sobre intercambio de información financiera.

Respecto de esta medida es necesario mencionar que hubiera sido suficiente con adecuar la actual norma a los requerimientos del CRS. Sin embargo, el proyecto plantea una modificación que tiene dos importantes consecuencias. En primer lugar dejaría que el actual procedimiento, que está a cargo de la Justicia Ordinaria, pase a ser responsabilidad del SII sin fijar límites en su actuar ya que se establece que “El Servicio determinará la forma, plazo y condiciones en que las instituciones financieras deberán entregar la información”. Y en segundo lugar no contemplaría una etapa de notificación y oposición de los clientes interesados dejándolos

indefensos y generando una desigualdad de condiciones entre las personas residentes en Chile y las personas con cuentas en Chile pero residentes de otra jurisdicción, ya que se vería afectado el secreto bancario.

En virtud de lo anterior parece necesario fijar un procedimiento justo para el traspaso de la información, de manera que no quede al mero arbitrio del SII y además proteger el secreto bancario de los depósitos y captaciones ya que por la redacción de la norma estaría siendo modificado tácitamente en virtud de este proyecto.

Asimismo, se establece que frente al incumplimiento de la obligación de entregar la información al SII se aplicará una multa equivalente a 1 UTA por cada una de las cuentas respecto de las cuales se infringió el deber, sin establecer un tope lo que parecería desproporcionado.

Además el proyecto es poco claro en el sentido de determinar el tiempo durante el cual se puede solicitar información a las instituciones financieras, ya que solo se establece que el registro durará como mínimo 7 años sin fijar un límite para saber qué tan antigua es la información que se podrá solicitar.

En tercer lugar, el proyecto realiza un reconocimiento tributario a las donaciones efectuadas en razón de la visita del Papa en enero del año 2018. Dicha medida permitiría una mayor recaudación para afrontar los gastos que dicho acontecimiento podría producir, ya que las donaciones que reciba la Conferencia Episcopal hasta un monto de \$4.000.000.000 y que cumplan con los demás requisitos, quedarán exentas de todo impuesto y del trámite

de insinuación, pudiendo el donatario rebajar como gasto las sumas donadas. Sin embargo en el proyecto no se establece un mecanismo para que el mismo donatario tome conocimiento de que su donación excede el límite máximo de las donaciones que quedarán cubiertas por estos beneficios, por lo que podría ocurrir que en la práctica haya donaciones que no queden cubiertas por estos beneficios.

Por último, el proyecto busca modificar el decreto ley que regula las donaciones que se hacen al Fisco. De acuerdo al Informe Financiero que se presenta no sería posible analizar el impacto que dichas donaciones producirían, debido a que en la práctica no se dan. El objetivo es que dichas donaciones queden exentas de todo impuesto y del trámite de insinuación para que tengan calidad de gasto necesario para producir renta, sin embargo el proyecto no regula nada con respecto a la Administración y Fines de dichos recursos. Además permite donaciones ilimitadas al Fisco ¿pero qué ocurrirá con los Privados?



V. **TEXTO DEL** PROYECTO DE LEY

Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley N° 824, de 1974:

- a) Elimínase el artículo 41 D¹.
- b) Modifícase la letra c) del inciso tercero del artículo 10, en el siguiente sentido:
 - i. Reemplázase la expresión “países o jurisdicciones que figuren en la lista a que se refiere el número 2, del artículo 41 D”, por la expresión “territorios o jurisdicciones que se consideren como un régimen fiscal preferencial conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 H”;
 - ii. Reemplázase la expresión “el país o jurisdicción listado”, por la expresión “uno de estos territorios o jurisdicciones”.
 - iii. Reemplázase la expresión “un país o jurisdicción que no forme parte de la lista señalada en el número 2, del artículo 41 D”, por la expresión “territorio o jurisdicción que no tenga un régimen fiscal preferencial en los términos dispuestos en el artículo 41 H”².
- c) Elimínase, en la letra a) del número 1, de la letra E) del artículo 14, la expresión “incluidos en la lista que establece el número 2, del artículo 41 D, o”³.

1 El artículo 41 D, que se elimina, se incluye en el **ANEXO I**.

2 La letra c) del inciso tercero quedaría con la siguiente redacción:

Se encontrarán afectas al impuesto establecido en el artículo 58 número 3), las rentas obtenidas por un enajenante no residente ni domiciliado en el país, que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o de la enajenación de otros derechos representativos del capital de una persona jurídica constituida o residente en el extranjero, o de títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad o patrimonio, constituido, formado o residente en el extranjero, en los siguientes casos:

c) Cuando las acciones, cuotas, títulos o derechos extranjeros enajenados, hayan sido emitidos por una sociedad o entidad domiciliada o constituida en uno de los territorios o jurisdicciones que se consideren como un régimen fiscal preferencial conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 H. En este caso, bastará que cualquier porcentaje del valor de mercado del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos extranjeros que dicho enajenante posea, directa o indirectamente, en la sociedad o entidad extranjera domiciliada o constituida en el uno de estos territorios o jurisdicciones, provenga de uno o más de los activos subyacentes indicados en los literales (i), (ii) y (iii) de la letra a) anterior y en la proporción que corresponda a la participación indirecta que en ellos posea el enajenante extranjero, salvo que el enajenante, su representante en Chile o el adquirente, si fuere el caso, acredite en forma fehaciente ante el Servicio, que: (A) en la sociedad o entidad extranjera cuyas acciones, cuotas, títulos o derechos se enajenan, no existe un socio, accionista, titular o beneficiario con residencia o domicilio en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera y, que, además, (B) sus socios, accionistas, titulares o beneficiarios que controlan, directa o indirectamente, un 50% o más de su capital o utilidades, son residentes o domiciliados en territorio o jurisdicción que no tenga un régimen fiscal preferencial en los términos dispuestos en el artículo 41 H, en cuyo caso la renta obtenida por el enajenante extranjero sólo se gravará en Chile si se cumple con lo dispuesto en las letras a) o b) precedentes.

3 Adecuación.

- d) Reemplázase, en el inciso tercero del número 1 del artículo 41 E, la expresión “o territorio incorporado en la lista a que se refiere el número 2 del artículo 41 D”, por la expresión “, territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41 H”⁴.
- e) Modifícase el artículo 41 F de la siguiente forma:
 - i. Elimínase el literal i)⁵ del numeral 6, pasando el actual literal ii) a ser i), y así sucesivamente.
 - ii. Reemplázase, en el párrafo segundo del numeral 13, la expresión “constituidas, establecidas, domiciliadas o residentes en alguno de los territorios o jurisdicciones a que se refiere el artículo 41 D, o que dicha persona o entidad quede comprendida”, por la expresión “que queden comprendidas”⁶.
- f) Reemplázase, en el número 2⁷ de la letra C del artículo 41 G, la expresión “de aquellos a que se refieren los artículos 41 D, número 2 y 41 H” por la expresión “que se considere como un régimen fiscal preferencial conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 H”.
- g) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 59, la expresión “que formen parte de la lista a que se refieren los artículos 41 D y 41 H”, por la expresión “que se consideren como un régimen fiscal preferencial conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 H”⁸.

4 Adecuación.

5 Disposición que se elimina (tarjada):

Artículo 41 F.- Los intereses, comisiones, remuneraciones por servicios y gastos financieros y cualquier otro recargo convencional, incluyendo los que correspondan a reembolsos, recargos de gastos incurridos por el acreedor o entidad relacionada en beneficio directo o indirecto de otras empresas relacionadas en el exterior que afecten los resultados del contribuyente domiciliado, residente, establecido o constituido en el país, en virtud de los préstamos, instrumentos de deuda y otros contratos u operaciones a que se refiere este artículo, y que correspondan al exceso de endeudamiento determinado al cierre del ejercicio, se gravarán con un impuesto único de tasa 35%, de acuerdo a las siguientes reglas:

6. Se considerará que el beneficiario de las partidas a que se refiere el inciso primero es una entidad relacionada con quien las paga, abona en cuenta o pone a disposición cuando:

i) ~~El beneficiario se encuentre constituido, establecido, domiciliado o residente en algunos de los territorios o jurisdicciones que formen parte de la lista a que se refiere el artículo 41 D, salvo cuando a la fecha del otorgamiento del crédito, el acreedor no se encontraba constituido, domiciliado, establecido o residente en un país o territorio que, con posterioridad, quede comprendido en dicha lista.~~

6 Adecuación.

7 El N°2 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 41 G.- No obstante lo dispuesto en el artículo 12 y en los artículos precedentes de este Párrafo, los contribuyentes o patrimonios de afectación con domicilio, residencia o constituidos en Chile, que directa o indirectamente controlen entidades sin domicilio ni residencia en el país, deberán considerar como devengadas o percibidas las rentas pasivas percibidas o devengadas por dichas entidades controladas, conforme a las reglas del presente artículo.

C.- Rentas pasivas.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considerarán rentas pasivas las siguientes:

2. Intereses y demás rentas a que se refiere el artículo 20, número 2, de esta ley, salvo que la entidad controlada no domiciliada que las genera sea una entidad bancaria o financiera regulada como tal por las autoridades del país respectivo y no se encuentre constituida, establecida, domiciliada o residente en una jurisdicción o territorio que se considere como un régimen fiscal preferencial conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 H.

8 El inciso primero quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 59.- Se aplicará un impuesto de 30% sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilio ni residencia en el país, por el uso, goce o explotación de marcas, patentes, fórmulas y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier forma de remuneración, excluyéndose las cantidades que correspondan a pago de bienes corporales internados en el país hasta un costo generalmente aceptado. Con todo, la tasa de impuesto aplicable se reducirá a 15% respecto de las cantidades que correspondan al uso, goce o explotación de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales, de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y de nuevas variedades vegetales, de acuerdo a las definiciones y especificaciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y en la Ley que Regula Derechos de Obtendores de Nuevas Variedades Vegetales, según corresponda. Asimismo, se gravarán con tasa de 15% las cantidades correspondientes al uso, goce o explotación de programas computacionales, entendiéndose por tales el conjunto de instrucciones para ser usados directa o indirectamente en un computador o procesador, a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidos en cassette, diskette, disco, cinta magnética u otro soporte material o medio, de acuerdo con la definición o especificaciones contempladas en la Ley Sobre Propiedad Intelectual, salvo que las cantidades se paguen o abonen en cuenta por el uso de programas computacionales estándar, entendiéndose por tales aquellos en que los derechos que se transfieren se limitan a los necesarios para permitir el uso del mismo, y no su explotación comercial, ni su reproducción o modificación con cualquier otro fin que no sea habilitarlo para su uso, en cuyo caso estarán exentas de este impuesto. En el caso de que ciertas regalías y asesorías sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del Comité

Artículo segundo.- Reemplázase, en el inciso segundo del número XVIII del artículo tercero transitorio de la ley N°20.780, la expresión "constituidas, establecidas, domiciliadas o residentes en alguno de los territorios o jurisdicciones a que se refiere el artículo 41 D, o que dicha persona o entidad quede comprendida", por la expresión "que queden comprendidas"⁹.

Artículo tercero.- Modifícase el artículo 62 del Código Tributario contenido en el decreto ley N° 830, de 1974, en el siguiente sentido:

- a) Sustitúyese, en el inciso quinto, la frase "los casos señalados en el inciso segundo" por la expresión "por las disposiciones de este artículo"¹⁰.
- b) Agréganse los siguientes incisos sexto y siguientes, nuevos:

"El procedimiento establecido en los incisos anteriores¹¹ no se aplicará respecto de la información que sea requerida por el Servicio para dar cumplimiento a los convenios internacionales que versen sobre intercambio de información que se encuentren vigentes en nuestro país, siempre que dicha información:

- i) corresponda a los titulares de cuentas financieras o controladores de dichos titulares que sean personas naturales, personas jurídicas o entidades que tengan residencia tributaria en otra jurisdicción, patrimonios quedados al fallecimiento de una persona que al momento de fallecer era residente de otra jurisdicción, o personas jurídicas o entidades que no tengan residencia tributaria en Chile y cuya administración efectiva se lleve a cabo en otra jurisdicción;
- ii) verse sobre el saldo o valor de las cuentas financieras pertenecientes a los titulares o controladores señalados en el literal i) anterior, las rentas pagadas a dichos titulares o controladores, y sobre la identidad de éstos; y,
- iii) se encuentre en poder de instituciones financieras calificadas como tales de conformidad con un convenio internacional que disponga el intercambio de información sobre cuentas financieras.

Ejecutivo del Banco Central de Chile, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%. No obstante, la tasa de impuesto aplicable será de 30% cuando el acreedor o beneficiario de las regalías o remuneraciones se encuentren constituidos, domiciliados o residentes en alguno de los países que se consideren como un régimen fiscal preferencial conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 H. El contribuyente local obligado a retener el impuesto deberá acreditar estas circunstancias y efectuar una declaración jurada, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.

9 El inciso segundo quedaría con la siguiente redacción:

La norma de control establecida en el artículo 41 F de la ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto vigente a contar del 1 de enero de 2015, no se aplicará cuando el deudor haya sido calificado como entidad financiera por el Ministerio de Hacienda hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 número 1 de la ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto vigente a la fecha señalada, y siempre que al término de cada año comercial se determine que al menos durante 330 días continuos o discontinuos, el 90% o más del total de los activos de dicha entidad corresponden a créditos otorgados o a bienes entregados en arrendamiento con opción de compra a personas o entidades no relacionadas. Para estos efectos, se considerarán los activos a su valor tributario de acuerdo a las normas de la ley sobre Impuesto a la Renta, y se entenderá que existe relación cuando se cumplan las condiciones de los numerales iii), iv), v) o vi) del número 6 del referido artículo 41 F. No procederá la calificación referida, cuando la entidad sea considerada como filial, coligada, agencia u otro tipo de establecimiento permanente o como parte de un mismo grupo empresarial de personas o entidades que queden comprendidas en al menos dos de los supuestos que establece el artículo 41 H. Con todo, el endeudamiento con entidades relacionadas e independientes no podrá durante el año comercial ser superior al 120 por ciento de los créditos otorgados o bienes entregados en arrendamiento con opción de compra. En caso de producirse un exceso que no se corrija en el plazo de 90 días contados desde su ocurrencia, se aplicará lo dispuesto en los incisos precedentes. Para estos efectos, la entidad que haya sido calificada de carácter financiero deberá informar al Servicio, en la forma y plazo que establezca mediante resolución, el cumplimiento de los requisitos que establece este párrafo.

10 Adecuación.

11 Véase el texto vigente del artículo 62 en el **ANEXO II**

El Servicio determinará la forma, plazo y condiciones en que las referidas instituciones financieras deberán entregar la información indicada en el inciso anterior. Para tal efecto, las instituciones financieras deberán llevar un registro que dé cuenta de los procedimientos de revisión realizados para identificar las cuentas financieras cuya información deba ser comunicada al Servicio. Dicho registro, junto con la información que le sirva de respaldo, deberá ser mantenido por no menos de 7 años contados desde la fecha en que la institución financiera debió tomar conocimiento y registrar la información que debió ser requerida para dar cumplimiento a los procedimientos de revisión e identificación de las cuentas financieras a que se refiere el presente artículo.

El incumplimiento de la obligación de ejecutar los procedimientos de revisión e identificación de cuentas financieras, de entregar la información al Servicio de manera oportuna y completa, y de mantener el registro señalado anteriormente por parte de una institución financiera, será sancionado con una multa equivalente a 1 unidad tributaria anual por cada una de las cuentas respecto de las cuales se infringió cada uno de los deberes señalados. La entrega de información maliciosamente falsa por parte del titular de la cuenta o sus controladores a la institución financiera, será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4¹² del artículo 97.

La información a la que accederá el Servicio con motivo de lo dispuesto en el inciso sexto y siguientes de este artículo, sólo podrá ser usada para cumplir con los propósitos de intercambio de información regulados en convenios internacionales vigentes que permitan el intercambio de información entre autoridades tributarias.

Las disposiciones de los incisos sexto y siguientes de este artículo, serán aplicadas e interpretadas siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o de la Organización de Naciones Unidas.”.

Artículo cuarto.- Los contribuyentes que, de acuerdo con las normas de la Ley sobre Impuesto a la Renta, declaren sus rentas efectivas demostradas mediante un balance general o se encuentren acogidas a las disposiciones del artículo 14 ter letra A) de dicha ley, y que efectúen donaciones a la Conferencia Episcopal de Chile, con motivo de la visita del Papa, podrán rebajar como gasto las sumas de dinero donadas, para los efectos de la determinación de la renta líquida imponible afecta a los tributos que establece dicha ley, aplicándose el límite global absoluto del artículo 10 de la Ley 19.885. Si el donante registra pérdida tributaria, podrá rebajar como gasto la cantidad donada hasta el 1,6% del capital propio tributario.

Sólo gozarán del beneficio establecido en el inciso anterior, las primeras donaciones que acepte la Conferencia Episcopal hasta que, en conjunto, se entere la cantidad máxima de \$4.000.000.000.- (cuatro mil millones de pesos). La Conferencia Episcopal certificará esta circunstancia al momento de aceptar cada donación.

12 Art. 97. Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en la forma que a continuación se indica:

4° Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grado medio a máximo.

Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multas del cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudado.

El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado.

Si, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos anteriores, se hubiere hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará la pena mayor asignada al delito más grave.

El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.

La deducción como gasto de las donaciones señaladas, se efectuará en el ejercicio en que efectivamente se incurrió en el desembolso y deberá acreditarse con recibos suscritos por representantes autorizados de la donataria, en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos.

Las donaciones que cumplan con los requisitos que establece este artículo no requerirán del trámite de la insinuación y estarán exentas de todo impuesto.

Artículo quinto. Reemplázase, en el artículo cuarto transitorio de la ley 20.899, la expresión “2017”, la segunda vez que aparece, por el guarismo “2019”, y la expresión “2019” por “2021”¹³.

Artículo sexto.- Intercálase, en el artículo 37 del Decreto Ley N°1939, de 1977, entre las expresiones “toda clase de impuestos” y “y no requerirán”, la expresión “y tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta para los efectos de lo establecido en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley N° 824, de 1974. Por su parte, estas donaciones no estarán sujetas al límite global absoluto establecido en el artículo 10 de la ley N°19.885”¹⁴.

13 El artículo cuarto transitorio quedaría con la siguiente redacción:

Artículo cuarto.- A partir del 1 de enero de 2017, no se aplicará la obligación de restitución que establece el artículo 63 de la ley sobre Impuesto a la Renta a los contribuyentes del Impuesto Adicional, residentes en países con los cuales Chile haya suscrito con anterioridad al 1 de enero de 2019 un convenio para evitar la doble tributación, aun cuando no se encuentre vigente, en el que se haya acordado la aplicación del Impuesto Adicional, siempre que el Impuesto de Primera Categoría sea deducible de dicho tributo o se contemple otra cláusula que produzca el mismo efecto. Lo dispuesto en este artículo regirá hasta el 31 de diciembre de 2021.

14 El artículo 37 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 37.- La donación de bienes que se haga al Fisco por cualquier institución o persona será aceptada mediante una resolución de la Dirección, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Estas donaciones estarán exentas de toda clase de impuestos y tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta para los efectos de lo establecido en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley N° 824, de 1974. Por su parte, estas donaciones no estarán sujetas al límite global absoluto establecido en el artículo 10 de la ley N°19.885 y no requerirán del trámite de la insinuación.

Tratándose de bienes raíces, corresponderá a la Dirección estudiar y calificar los títulos de dominio del donante y redactar la escritura pública de donación que será suscrita, en representación del Fisco, por el Director o por el funcionario que éste designe.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero Transitorio.- La eliminación del artículo 41 D de la ley sobre Impuesto a la Renta dispuesta por la letra a) del artículo primero de la presente ley entrará en vigencia el 1° de enero del año 2022. No obstante lo anterior, a partir de la publicación de la presente ley, no podrán ingresar nuevas empresas al régimen establecido en la norma del 41 D.

Artículo Segundo Transitorio.- Las sociedades anónimas abiertas, las sociedades anónimas cerradas y sus accionistas que, a la fecha de la publicación de la presente ley, se encuentren acogidas a las disposiciones del artículo 41 D de la ley sobre Impuesto a la Renta, se sujetarán a las siguientes disposiciones:

- a) Las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas acogidas a las disposiciones del referido artículo 41 D al 31 de diciembre de 2021, se deberán incorporar al régimen general de impuesto de primera categoría con deducción parcial de crédito en los impuestos finales establecido en la letra B) del artículo 14 de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, a partir del año comercial 2022.
- b) Las sociedades que se incorporen al régimen general, sin perjuicio de lo que al respecto establece el N° 2, del artículo 18 del Código Tributario, deberán llevar contabilidad completa en moneda nacional. En el caso en que por aplicación de lo dispuesto en el número 4, del derogado artículo 41 D, la sociedad llevara su contabilidad en moneda extranjera y no obtuviere autorización del Servicio de Impuestos Internos para mantenerla, deberá efectuar la conversión a moneda nacional al tipo de cambio observado al 31 de diciembre del año anterior al ejercicio de su incorporación al régimen general. De igual forma deberán reemplazar el registro especial a que se refiere la disposición mencionada por el registro general dispuesto en el artículo 68 del Código Tributario, en la forma que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. La conversión en moneda nacional producirá efectos en el resultado tributario, según las reglas generales.
- c) Para los efectos de la incorporación al régimen de tributación establecido en la letra B, del artículo 14 de la ley sobre Impuesto a la Renta, las sociedades anónimas abiertas y cerradas acogidas al régimen del artículo 41 D deberán determinar al 31 de diciembre de 2021, cuando corresponda, los antecedentes que detalla la letra a), del número 1, del numeral I del artículo tercero de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 20.780, modificada por la ley N° 20.899.
- d) Para los fines de informar los antecedentes que solicita el numeral i) de la referida letra a), se considerará aquellos que figuren en los registros que actualmente se encuentran obligados a llevar los contribuyentes sujetos a las disposiciones del artículo 41 D, de la ley sobre Impuesto a la Renta.
- e) Los contribuyentes que queden sujetos al régimen general y a las disposiciones de la letra B del artículo 14 de la ley sobre Impuesto a la Renta, a contar del 1° de enero del ejercicio comercial 2022, deberán aplicar, cuando corresponda, las reglas establecidas en la letra b) del número 1 y los numerales 5, 6, y 9, del numeral I del artículo tercero de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 20.780, modificada por la ley N° 20.899.
- f) Las distribuciones que se efectúen a contar del 1° de enero del año 2022, se imputarán en la forma establecida en la letra c) del número 1, del numeral I del artículo tercero de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 20.780,

modificada por la ley N° 20.899, considerando, además, cuando corresponda, lo dispuesto en el numeral ii) de esta letra c).

- g) Las rentas que se encuentren pendientes de distribución a los respectivos accionistas, deberán ser anotadas en un registro especial, cuya forma establecerá el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Cuando dichas rentas sean distribuidas a accionistas sin domicilio ni residencia en Chile, no quedarán afectas a impuesto alguno y podrán ser distribuidas a dichos accionistas en cualquier momento, sin atender al orden de imputación que establezca la Ley sobre Impuesto a la Renta a la fecha de la distribución. Si las mismas rentas, son distribuidas a accionistas con domicilio o residencia en Chile, quedarán afectas a los impuestos generales de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con derecho a rebajar como crédito el impuesto soportado por la sociedad plataforma de negocios, sobre las rentas de fuente nacional que hayan obtenido. Para los efectos de calcular el referido crédito, la sociedad deberá considerar que las utilidades que se distribuyen, afectadas por el impuesto referido, corresponden a todos sus accionistas en proporción a la propiedad existente de los accionistas residentes o domiciliados en Chile y los no residentes ni domiciliados en el país.

Artículo Tercero Transitorio.- El artículo cuarto del proyecto de ley registrá desde la fecha de publicación en el Diario Oficial y hasta el 15 de enero de 2018.

Artículo Cuarto Transitorio.- Las disposiciones contenidas en la presente ley que no tengan una regla especial de vigencia, conforme a los artículos precedentes, entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación.”

ANEXO I

Artículo 41 D del decreto ley 824, de 1974:

Artículo 41º D.- A las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas que acuerden en sus estatutos someterse a las normas que rigen a éstas, que se constituyan en Chile y de acuerdo a las leyes chilenas con capital extranjero que se mantenga en todo momento de propiedad plena, posesión y tenencia de socios o accionistas que cumplan los requisitos indicados en el número 2, sólo les será aplicable lo dispuesto en este artículo en reemplazo de las demás disposiciones de esta ley, salvo aquellas que obliguen a retener impuestos que afecten a terceros o a proporcionar información a autoridades públicas, respecto del aporte y retiro del capital y de los ingresos o ganancias que obtengan de las actividades que realicen en el extranjero, así como de los gastos y desembolsos que deban efectuar en el desarrollo de ellas. El mismo tratamiento se aplicará a los accionistas de dichas sociedades domiciliados o residentes en el extranjero por las remesas, y distribuciones de utilidades o dividendos que obtengan de éstas y por las devoluciones parciales o totales de capital provenientes del exterior, así como por el mayor valor que obtengan en la enajenación de las acciones en las sociedades acogidas a este artículo, con excepción de la parte proporcional que corresponda a las inversiones en Chile, en el total del patrimonio de la sociedad. Para los efectos de esta ley, las citadas sociedades no se considerarán domiciliadas en Chile, por lo que tributarán en el país sólo por las rentas de fuente chilena.

Las referidas sociedades y sus socios o accionistas deberán cumplir con las siguientes obligaciones y requisitos, mientras la sociedad se encuentre acogida a este artículo:

1. Tener por objeto exclusivo la realización de inversiones en el país y en el exterior, conforme a las normas del presente artículo.
2. Los accionistas de la sociedad y los socios o accionistas de aquellos, que sean personas jurídicas y que tengan el 10% o más de participación en el capital o en las utilidades de los primeros, no deberán estar domiciliados ni ser residentes en Chile, ni en países o en territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, que podrá modificarse cuantas veces sea necesario a petición de parte o de oficio, se determinará la lista de países que se encuentran en esta situación. Para estos efectos, sólo se considerarán en esta lista los Estados o territorios respectivos que estén incluidos en la lista de países que establece periódicamente la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos. En todo caso, no será aplicable lo anterior si al momento de constituirse la sociedad en Chile y ya efectuados los correspondientes aportes, los accionistas de la sociedad y los socios o accionistas de aquellos, si son personas jurídicas, no se encontraban domiciliados o residentes en un país o territorio que, con posterioridad a tales hechos, quede comprendido en la lista a que se refiere este número. Igual criterio se aplicará respecto de las inversiones que se efectúen en el exterior en relación al momento y al monto efectivamente invertido a esa fecha.

Sin perjuicio de la restricción anterior, podrán adquirir acciones de las sociedades acogidas a este artículo las personas domiciliadas o residentes en Chile, siempre que en su conjunto no posean o participen directa o indirectamente del 75% o más del capital o de las utilidades de ellas. A estas personas se le aplicarán las mismas normas que esta ley dispone para los accionistas de sociedades anónimas constituidas fuera del país, incluyendo el impuesto a la renta a las ganancias de capital que se determinen en la enajenación de las acciones de la sociedad acogida a este artículo.

3. El capital aportado por el inversionista extranjero deberá tener su fuente de origen en el exterior y deberá efectuarse en moneda extranjera de libre convertibilidad a través de alguno de los mecanismos que la legislación chilena establece

para el ingreso de capitales desde el exterior. Igual tratamiento tendrán las utilidades que se originen del referido capital aportado. Asimismo, la devolución de estos capitales deberá efectuarse en moneda extranjera de libre convertibilidad, sujetándose a las normas cambiarias vigentes a esa fecha.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el capital podrá ser enterado en acciones, como también en derechos sociales, pero de sociedades domiciliadas en el extranjero de propiedad de personas sin domicilio ni residencia en Chile, valorados todos ellos a su precio bursátil o de libros, según corresponda, o de adquisición en ausencia del primero.

En todo caso, la sociedad podrá endeudarse, pero los créditos obtenidos en el extranjero no podrán exceder en ningún momento la suma del capital aportado por los inversionistas extranjeros y de tres veces a la aportada por los inversionistas domiciliados o residentes en Chile. En el evento que la participación en el capital del inversionista domiciliado o residente en el extranjero aumente o bien que el capital disminuya por devoluciones del mismo, la sociedad deberá, dentro del plazo de sesenta días contados desde la ocurrencia de estos hechos, ajustarse a la nueva relación deuda-capital señalada.

En todo caso, los créditos a que se refiere este número, estarán afectos a las normas generales de la Ley de Timbres y Estampillas y sus intereses al impuesto establecido en el artículo 59°, número 1), de esta ley.

4. La sociedad deberá llevar contabilidad completa en moneda extranjera o moneda nacional si opta por ello, e inscribirse en un registro especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, en reemplazo de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Tributario debiendo informar, periódicamente, mediante declaración jurada a este organismo, el cumplimiento de las condiciones señaladas en los números 1, 2, 3, 5 y 6, así como cada ingreso de capital al país y las inversiones o cualquier otra operación o remesa al exterior que efectúe, en la forma, plazo y condiciones que dicho Servicio establezca.

La entrega de información incompleta o falsa en la declaración jurada a que se refiere este número, será sancionada con una multa de hasta el 10% del monto de las inversiones efectuadas por esta sociedad, no pudiendo en todo caso ser dicha multa inferior al equivalente a 40 unidades tributarias anuales la que se sujetará para su aplicación al procedimiento establecido en el artículo 165 del Código Tributario.

5. No obstante su objeto único, las sociedades acogidas a este artículo podrán prestar servicios remunerados a las sociedades y empresas indicadas en el número siguiente, relacionados con las actividades de estas últimas, como también invertir en sociedades anónimas constituidas en Chile. Estas deberán aplicar el impuesto establecido en el número 2) del artículo 58°, con derecho al crédito referido en el artículo 63°, por las utilidades que acuerden distribuir a las sociedades acogidas a este artículo, cuando proceda. A los accionistas domiciliados o residentes en Chile a que se refiere el número 2.-, inciso segundo de este artículo, que perciban rentas originadas en las utilidades señaladas, se les aplicará respecto de ellas las mismas normas que la ley dispone para los accionistas de sociedades anónimas constituidas fuera del país, y además, con derecho a un crédito con la tasa de impuesto del artículo 58°, número 2), aplicado en la forma dispuesta en los números 2.-, 3.- y 4.- de la letra A.- del artículo 41 A de esta ley.

Las sociedades acogidas a este artículo, que invirtieron en sociedades constituidas en Chile deberán distribuir sus utilidades comenzando por las más antiguas, registrando en forma separada las que provengan de sociedades constituidas en Chile de aquellas obtenidas en el exterior. Para los efectos de calcular el crédito recuperable a que se refiere la parte final del inciso anterior, la sociedad deberá considerar que las utilidades que se distribuyen, afectadas por el impuesto referido, corresponden a todos sus accionistas en proporción a la propiedad existente de los accionistas residentes o domiciliados en Chile y los no residentes ni domiciliados en el país.

Las sociedades acogidas a este artículo deberán informar al contribuyente y al Servicio de Impuestos Internos el monto de la cantidad con derecho al crédito que proceda deducir.

6. Las inversiones que constituyen su objeto social se deberán efectuar mediante aporte social o accionario, o en otros títulos que sean convertibles en acciones, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 87 de la ley N°

18.046, en empresas constituidas y formalmente establecidas en el extranjero, en un país o territorio que no sea de aquellos señalados en el número 2, de este artículo, para la realización de actividades empresariales. En caso que las actividades empresariales referidas no sean efectuadas en el exterior directamente por las empresas mencionadas, sino por filiales o coligadas de aquellas o a través de una secuencia de filiales o coligadas, las empresas que generen las rentas respectivas deberán cumplir en todo caso con las exigencias de este número.

7. El mayor valor que se obtenga en la enajenación de las acciones representativas de la inversión en una sociedad acogida a las disposiciones de este artículo no estará afecto a los impuestos de esta ley, con las excepciones señaladas en el inciso primero y en el inciso segundo del número 2. Sin embargo, la enajenación total o parcial de dichas acciones a personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en alguno de los países o territorios indicados en el número 2 de este artículo o a filiales o coligadas directas o indirectas de las mismas, producirá el efecto de que, tanto la sociedad como todos sus accionistas quedarán sujetos al régimen tributario general establecido en esta ley, especialmente en lo referente a los dividendos, distribuciones de utilidades, remesas o devoluciones de capital que ocurran a contar de la fecha de la enajenación.
8. A las sociedades acogidas a las normas establecidas en el presente artículo, no les serán aplicables las disposiciones sobre secreto y reserva bancario establecido en el artículo 154 de la Ley General de Bancos. Cualquier información relacionada con esta materia deberá ser proporcionada a través del Servicio de Impuestos Internos, en la forma en la que se determine mediante un reglamento contenido en un decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
9. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo determinará la aplicación plena de los impuestos de la presente ley a contar de las rentas del año calendario en que ocurra la contravención.

ANEXO II

Artículo 62 del Código Tributario:

Art. 62. - La Justicia Ordinaria podrá autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Igual facultad tendrán los Tribunales Tributarios y Aduaneros cuando conozcan de un proceso sobre aplicación de sanciones conforme al artículo 161.

Asimismo, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de conformidad a lo establecido por el Título VI del Libro Tercero, el Servicio podrá requerir la información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o falta de ellas, en su caso. La misma información podrá ser solicitada por el Servicio para dar cumplimiento a los siguientes requerimientos:

- i) Los provenientes de administraciones tributarias extranjeras, cuando ello haya sido acordado bajo un convenio internacional de intercambio de información suscrito por Chile y ratificado por el Congreso Nacional.
- ii) Los originados en el intercambio de información con las autoridades competentes de los Estados Contratantes en conformidad a lo pactado en los Convenios vigentes para evitar la doble imposición suscritos por Chile y ratificados por el Congreso Nacional. Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información bancaria sometida a secreto o reserva que formule el Director de conformidad con el inciso anterior, se sujetarán al siguiente procedimiento:
 - 1. El Servicio, a través de su Dirección Nacional, notificará al banco, requiriéndole para que entregue la información dentro del plazo que ahí se fije, el que no podrá ser inferior a cuarenta y cinco días contados desde la fecha de la notificación respectiva. El requerimiento deberá cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos:
 - a) Contener la individualización del titular de la información bancaria que se solicita;
 - b) Especificar las operaciones o productos bancarios, o tipos de operaciones bancarias, respecto de los cuales se solicita información;
 - c) Señalar los períodos comprendidos en la solicitud, y
 - d) Expresar si la información se solicita para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos del contribuyente o la falta de ellas, en su caso, o bien para dar cumplimiento a un requerimiento de información de los indicados en el inciso anterior, identificando la entidad requirente y los antecedentes de la solicitud.
 - 2. Dentro de los cinco días siguientes de notificado, el banco deberá comunicar al titular la información requerida, la existencia de la solicitud del Servicio y su alcance. La comunicación deberá efectuarse por carta certificada enviada al domicilio que tenga registrado en el banco o bien por correo electrónico, cuando así estuviera convenido o autorizado expresamente. Toda cuestión que se suscite entre el banco y el titular de la información requerida relativa a las deficiencias en la referida comunicación, o incluso a la falta de la misma, no afectarán el transcurso del plazo a que se refiere el numeral precedente. La falta de comunicación por parte del banco lo hará responsable de los perjuicios que de ello puedan seguirse para el titular de la información.

3. El titular podrá responder el requerimiento al banco dentro del plazo de 15 días contado a partir del tercer día desde del envío de la notificación por carta certificada o correo electrónico a que se refiere el número 2 de este inciso. Si en su respuesta el titular de la información autoriza al banco a entregar información al Servicio, éste deberá dar cumplimiento al requerimiento sin más trámite, dentro del plazo conferido.

Del mismo modo procederá el banco en aquellos casos en que el contribuyente le hubiese autorizado anticipadamente a entregar al Servicio información sometida a secreto o reserva, cuando éste lo solicite en conformidad a este artículo. Esta autorización deberá otorgarse expresamente y en un documento exclusivamente destinado al efecto. En tal caso, el banco estará liberado de aplicar el procedimiento previsto en el número 2) de este inciso. El contribuyente siempre podrá revocar, por escrito, la autorización concedida al banco, lo que producirá efectos a contar de la fecha en que la revocación sea recibida por el banco.

A falta de autorización, el banco no podrá dar cumplimiento al requerimiento ni el Servicio exigirlo, a menos que este último le notifique una resolución judicial que así lo autorice de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente.

4. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que venza el plazo previsto para la respuesta del titular de la información, el banco deberá informar por escrito al Servicio respecto de si ésta se ha producido o no, así como de su contenido. En dicha comunicación el banco deberá señalar el domicilio registrado en él por el titular de la información, así como su correo electrónico, en caso de contar con este último antecedente. Además, de ser el caso, se deberá señalar si el titular de la información ha dejado de ser cliente del banco.
5. Acogida la pretensión del Servicio por sentencia judicial firme, éste notificará al banco acompañando copia autorizada de la resolución del tribunal. La entidad bancaria dispondrá de un plazo de diez días para la entrega de la información solicitada.
6. El retardo u omisión total o parcial en la entrega de la información por parte del banco será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del número 1° del artículo 97.

La información bancaria sometida a secreto o sujeta a reserva, obtenida por el Servicio bajo este procedimiento, tendrá el carácter de reservada de conformidad a lo establecido en el artículo 35 y sólo podrá ser utilizada por éste para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o la falta de ellas, en su caso, para el cobro de los impuestos adeudados y para la aplicación de las sanciones que procedan. El Servicio adoptará las medidas de organización interna necesarias para garantizar su reserva y controlar su uso adecuado. La información así recabada que no dé lugar a una gestión de fiscalización o cobro posterior, deberá ser eliminada, no pudiendo permanecer en las bases de datos del Servicio.

Las autoridades o funcionarios del Servicio que tomen conocimiento de la información bancaria secreta o reservada estarán obligados a la más estricta y completa reserva respecto de ella y, salvo los casos señalados en el inciso segundo, no podrán cederla o comunicarla a terceros. La infracción a esta obligación se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución.

